

Cúmulo de errores y balones fuera

Así se puede definir la política sanitaria del partido en el gobierno. Si la degradación de la calidad en la atención sanitaria resulta algo más que evidente, los últimos acontecimientos ponen entre la espada y la pared a unos políticos, no solo carentes de ética como se ha demostrado repetidamente en todos los aspectos de su función de gobierno, sino carentes también de un mínimo de lógica y previsión.

La obcecación por supeditarse a las exigencias tanto del sector financiero como al sector liberal-capitalista que domina el espectro político europeo, les llevó a asumir de buen grado los recortes de servicios sociales y las políticas económicas que asfixian a la mayoría de la ciudadanía, con el beneficio añadido de facilitar lucrativos negocios al gran capital, como es el caso del desmantelamiento de la sanidad pública para favorecer a una sanidad privada cuya única ambición es mejorar su cuenta de resultados.

En este escenario, el desmantelamiento del hospital Carlos III, que en su momento estaba dotado de recursos técnicos avanzados (sin llegar a un nivel de seguridad biológica 4) y un equipo de profesionales preparados para enfrentarse a situaciones críticas, les pareció una opción adecuada al doble objetivo de reducir gastos y dar cancha a la sanidad privada. El hecho de que hayamos sufrido repetidas advertencias de lo que tarde o temprano acabara pasando, una crisis sanitaria de alta envergadura (no solo el ébola es una clara amenaza. La facilidad con que hoy en día las personas se desplazan de un extremo a otro del mundo, convierte la posibilidad de una pandemia en algo prácticamente inevitable), es un hecho que ni fue considerado por las mentes "preclaras" de nuestros gobernantes. Lo lógico y deseable habría sido ampliar la inversión en el Carlos III y elevar su nivel de seguridad biológica. La decisión fue la contraria.

Incapaces de valorar los peligros reales, se tomó la decisión equivocada de repatriar a los dos enfermos de ébola. Unos enfermos que por sus circunstancias personales (estado avanzado de la enfermedad, edad, patologías añadidas) apenas tenían posibilidades de supervivencia, si es que alguna tenían. Siempre nos quedará la duda de que peso tuvo en la decisión el hecho de que fueran religiosos, especialmente porque en un caso similar, pero sin el componente de enfermedad contagiosa (lo que eliminaba de la ecuación el riesgo sanitario de expansión de la enfermedad), el

mismo gobierno se negó a la repatriación de una española enferma en Argentina que meses después, y tras largo periodo de internamiento en un hospital de la citada nación, murió. Una clara demostración de cómo las argumentaciones que pretendían justificar la decisión de repatriación (obligación del estado frente a cualquier ciudadano) eran en realidad falsas.

Con tal decisión se incumplió un principio básico de control de enfermedades infecciosas: los afectados no se trasladan, se atienden en el lugar donde se ha dado el foco de infección. Una norma de una lógica aplastante. El traslado de tales enfermos siempre, incluso contando con los mejores servicios técnicos y equipos humanos, supone un riesgo. La única justificación posible sería la de que sirvieran de estudio y como medio de prueba en la investigación de medicamentos en vías de desarrollo (siempre contando con los recursos de contención de más alto nivel y personal especialmente preparado). El riesgo en este caso puede quedar compensado con el beneficio a largo plazo de contar con nuevos recursos para combatir la enfermedad. No era, evidentemente, nuestro caso.

Que el protocolo establecido para atender esta crisis ha hecho agua por todas partes, es algo evidente. Pero también previsible. No se puede implantar un protocolo semejante y disponer de personal preparado para llevarlo a cabo a través de una improvisación hecha de prisa y corriendo. A medida que van pasando los días, salen a la luz una infinidad de errores e imprevisiones, Si al final de esta situación solo nos encontramos ante un caso aislado, mucha, muchísima suerte habremos tenido, porque con el cúmulo de errores, improvisaciones, material inadecuado, falta de preparación previa, etc., que fueran varios los casos de contagio no sería nada extraño.

Es más, siguiendo normas estrictas de prevención ante enfermedades altamente contagiosas y de funestas consecuencias, todo el personal que directa o indirectamente hubiera participado en la atención de los pacientes debería ser sometido a cuarentena (aislado de contacto durante todo el proceso de atención, más el periodo de posible incubación de la enfermedad una vez terminada dicha atención), algo que ni se planteó. De hecho las personas que hoy están sometidas a vigilancia (salvo los pocos internados) están haciendo vida normal (solo se les ha indicado que se tomen la temperatura). Estas son en realidad decisiones políticas, no técnicas. Y cuando en temas críticos prevalecen los condicionantes políticos sobre los técnicos, mal vamos.

Eso me hace pensar que la decisión de sacrificar el perro de la enfermera contagiada de ébola ha sido también más influida por el peso político que el técnico (¿Intento de dar la imagen de que el gobierno es capaz de tomar decisiones?). En primer lugar, no existe clara información del posible desarrollo de la enfermedad en los perros. Todo lo más, nos encontramos con informaciones contradictorias. En segundo lugar es una oportunidad perdida, precisamente, para obtener más información al respecto. Si se han detectado anticuerpos en perros expuestos al virus pero no se observa la muerte sistemática de los mismos, ni sintomatología ¿Quiere decir que los perros están mejor dotados para hacer frente a la enfermedad que los humanos? ¿No sería interesante su estudio? Podrían obtenerse datos útiles para el tratamiento de la enfermedad.

Pero lo más deleznable de la actuación de los responsables políticos es pretender desviar las responsabilidades del caso a la propia afectada del contagio. Una actitud cobarde, vil y despreciable que ya solo por ella sola debería acabar con su cese fulminante. Y sin embargo ese es el proceder habitual de esos políticos faltos de ética y honestidad. Culpar a los demás de lo que únicamente son culpables ellos.